LECCIÓN 4: LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS

Profª. Dra. Claribel de Castro Sánchez (UNED)

Profª. Dra. Carmen Quesada Alcalá (UNED)

1. LA CODIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS. 1.1. REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS; 1.2. LA PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y DE LOS TRATOS Y PENAS CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES: 1.2.1. La convención de las Naciones Unidas contra la Tortura; 1.2.2. El convenio Europeo contra la tortura. 2. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS. 2.1. ÁMBITO DE NACIONES UNIDAS: EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA; 2.2. ÁMBITO DEL CONSEJO DE EUROPA: 2.2.1. Comité Europeo contra la tortura; 2.2.2. La acción del TEDH en el desarrollo de los derechos de los reclusos. 3. GLOSARIO. 4. BIBLIOGRAFÍA.

ALGUNAS PREGUNTAS INICIALES:

- 1.- ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento de los derechos de los reclusos en el marco internacional?
- 2.- ¿Existen normas internacionales que obliguen a los Estados a respetar los derechos humanos de los reclusos? ¿Cuáles son los principales convenios atinentes a los derechos humanos?, ¿en estos convenios se recogen los derechos específicos de los reclusos?, ¿por qué?
- 3.- ¿Cuál es el valor de las denominadas Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos?
- 4.- Con carácter universal ¿Qué órganos protegen esos derechos humanos? ¿Existe algún mecanismo internacional que permita la denuncia por parte de un recluso contra un Estado por la violación de sus derechos?
- 5.- ¿Cuáles son los principales mecanismos de los que dispone el Consejo de Europa para proteger los derechos de los reclusos?
- 6.- Y en el ámbito europeo ¿Existe algún tribunal internacional que proteja los derechos humanos de los reclusos? En caso de existir, ¿cuál será la eficacia de sus sentencias?
- 7.- ¿Cuál ha sido la incidencia de la acción de estos mecanismos respecto de la mejora de la situación de la administración penitenciaria en Europa? ¿y en nuestro país?

OBJETIVOS:

- ✓ Identificación de los derechos específicos de los reclusos, en el ámbito universal y regional europeo.
- ✓ Identificación de las diferentes categorías de instrumentos Internacionales en el ámbito de la protección de los derechos humanos de los reclusos.
- ✓ Valoración crítica de la relevancia de estos mecanismos.
- ✓ Caracterización de la relación entre los mecanismos regionales y los mecanismos existentes en el ámbito universal.
- ✓ Identificación de las principales aportaciones realizadas por dichos mecanismos al tema de los derechos específicos de los reclusos.
- ✓ Análisis valorativo de la actuación de los mecanismos internacionales en relación con la tortura.
- ✓ Incidencia de estos mecanismos en España.

1. LA CODIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS.

La idea de elaborar un compendio de reglas internacionales para el tratamiento de las personas privadas de libertad aparece por vez primera en 1925 cuando el *Director de Prisiones de Inglaterra y Gales* propuso a la Comisión Penitenciaria Internacional la elaboración de las mismas. Siguiendo esta propuesta, esta comisión aprobó la primera versión de un *Conjunto de Reglas para el tratamiento de los Presos* en 1929, que indicaban las condiciones mínimas que desde el punto de vista humanitario y social debía reunir el tratamiento de los reclusos; este texto no tenía, en cualquier caso, un valor vinculante sino meramente orientador para los responsables penitenciarios.

Ya en el seno de la Sociedad de Naciones, la Asamblea de la Sociedad de Naciones se ocupó de este asunto en 1933, al reelaborar aquellas *normas* y estableciendo recomendaciones a los Estados miembros a fin de que adaptasen su legislación y prácticas al contenido de las reglas. Así se da un paso más ya que se trasciende el ámbito de discusión de los responsables penitenciarios para instar a los Estados a que incorporen esas reglas mínimas en sus legislaciones. Sin embargo, tales recomendaciones de la Sociedad de Naciones, como su propio nombre indica, sólo recomiendan, no vinculan jurídicamente

Finalizada la II Guerra Mundial la **Organización de las Naciones Unidas** y la **Comisión Internacional Penal y Penitenciaria** coinciden en la necesidad de revisar los textos elaborados veinte años antes. Por ello, se encargó a la Comisión la elaboración de un Proyecto de Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos que fue finalizado en 1951. Posteriormente, en 1955, se celebró el *Primer Congreso de las Naciones Unidas en materia de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente* y se pidió que el Proyecto de Reglas

Mínimas se trasladase a los Estados para que las adoptase. Finalmente el ECOSOC, a través de su Resolución 663 C (XXIV) aprobó las **Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos** en 1977. Desde entonces hasta ahora, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas, como en el de organizaciones regionales, como en foros especializados, periódicamente se aborda la necesidad de revisar esas reglas e, incluso, la oportunidad de adoptar un tratado en la materia que tenga como fin establecer mecanismos de protección de tales derechos.

En relación con el ámbito regional europeo y, como primer apunte, no conviene olvidar que el **Consejo de Europa** ha sido, hasta el momento el marco natural de protección de los derechos humanos en la región europea. La razón estriba en que los artículos 2, 3 y 8 del *Estatuto del Consejo de Europa* (el tratado constitutivo de esta Organización) hacen de la promoción y protección de los derechos humanos uno de los fundamentos de la actuación del Consejo. En el seno del Consejo de Europa, se ha llevado a cabo la labor más importante de elaboración de un catálogo de derechos humanos, tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales (el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea). Sin embargo, no se ha elaborado un catálogo de derechos propios de los reclusos. ¿Por qué? La razón la vamos a encontrar en la propia evolución de la Comunidad Internacional tras la II Guerra Mundial.

Al finalizar la II Guerra Mundial, comienza a surgir en gran parte de Europa la necesidad de reforma de los sistemas penitenciarios para lograr una mayor *humanización de la prisión*. Ello contrasta con la finalidad de la prisión con anterioridad, consistente tan sólo en la protección de la sociedad poniendo a buen recaudo al delincuente.

Efectivamente, a partir de 1945, los distintos Estados de Europa se dedicaron a reformar sus sistemas penitenciarios, preparando a los reclusos para volver a la vida en libertad, la cárcel deja de ser un lugar de aislamiento para convertirse en el lugar en el que se le aplica al preso un tratamiento que le permitirá un día volver a su vida "normal". Cambia el concepto de la pena, y ya se habla de la función de reinserción social del delincuente. Nuestro sistema penitenciario es pleno reflejo de este cambio, y así, en nuestra Constitución del año 78, en concreto en el art.25.2, se dispone: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social [...]".

La razón de esta humanización de la prisión se halla en la opinión pública existente con posterioridad a la II Guerra Mundial, una opinión pública sensibilizada con el dolor humano y que reivindica la dignidad humana. Recordemos que algunos de los nuevos dirigentes políticos europeos habían sido privados de libertad durante la guerra, habían estado en campos de concentración o en el exilio...

En este ambiente de posguerra, se produce la internacionalización de los derechos humanos (tal y como habéis estudiado en la lección 1), y surgen organizaciones como el Consejo de Europa. Desde entonces, en este ámbito europeo, han proliferado tratados internacionales (textos internacionales obligatorios) dedicados a proteger los derechos humanos de los más vulnerables, y sin embargo, ninguno de ellos se ha ocupado

específicamente de los presos, a similitud de lo que ha ocurrido en el ámbito universal de las Naciones Unidas.

¿Por qué esta reticencia a tratar específicamente, también en el ámbito de Europa, el tema de los reclusos? El motivo se halla en la vinculación que existe entre la política penal y la soberanía de los Estados, de modo que éstos se resisten a ceder el “poder de castigar a sus individuos”

En el marco del Consejo de Europa, tal y como ya habéis estudiado en la lección 1, contamos con una serie de instrumentos normativos que contienen un catálogo de derechos humanos. Es el caso del **Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales** (CEDH). Este texto incluye los derechos civiles y políticos que proceden de las tradiciones constitucionales de los Estados de Europa Occidental, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, etc..., pero dicho Convenio cuenta con una sola disposición que recoge los derechos de las personas privadas de libertad: el art. 5 del CEDH. Asimismo, conviene tomar en consideración el art.3 que establece que: “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Este Convenio cuenta con 14 Protocolos que los completan, pero se echa de menos un protocolo específico relativo al tema de los derechos de los reclusos. En su momento hubo un proyecto de Protocolo 12 referente a esta cuestión, que no salió adelante. Igualmente, en el tema específico de la tortura, contamos con el siguiente instrumento: el **Convenio Europeo para la prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes**, del que nos ocuparemos seguidamente.

Tanto el CEDH como el Convenio Europeo contra la tortura con textos internacionales obligatorios para los Estados que los han ratificado, que han dicho sí a los mismos (como es el caso de España). Sin embargo, existen otros textos, que sin ser obligatorios, funcionan como recomendaciones que los Estados deberían tener en cuenta. Es el llamado “soft law” o “derecho blando”. Así, en el marco del Consejo de Europa, contamos con:

- Las **Reglas Penitenciarias Europeas** (versión europea de las Reglas Mínimas, que hemos examinado, y que existen en las Naciones Unidas). Estas RPE han servido de inspiración a las legislaciones penitenciarias europeas, y en concreto, a la legislación penitenciaria española. Sus principios no son obligatorios, pero reflejan una concepción liberal de la prisión, y contemplan derechos como: el derecho a la no discriminación, el acceso a los recursos, la información al detenido de sus derechos, etc...).

1.1. REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS.

Si bien es cierto que no existe ningún tratado internacional que de forma general e integral se ocupe de la protección de los derechos de las personas que se encuentran cumpliendo una pena de privación de libertad, como hemos visto antes, si que existen algunos proyectos en este ámbito. A pesar de la multiplicidad de iniciativas al respecto, nuestro estudio se centrará en el ámbito de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa por entender que son las áreas que revisten un especial interés para un estudiante de Trabajo Social en España.

Como ya hemos apuntado antes, en el marco de las Naciones Unidas, se adoptó la Resolución 663 (C) del ECOSOC que contenía las **Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos** (1977). Tal y como se reconoce en sus observaciones preliminares “el objeto de las reglas siguientes no es describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos”. Seguidamente, se reconocen los principios que deben guiar el tratamiento a los reclusos: el principio de no discriminación; el respeto de la libertad ideológica y religiosa. Posteriormente se recogen reglas mínimas de tratamiento a los reclusos como la necesidad de separar a las diferentes categorías de reclusos en base a su edad, antecedentes y motivos de reclusión; las condiciones mínimas de los locales destinados a los reclusos; cuestiones de higiene personal y alimentación; cuestiones relativas a los servicios médicos; cuestiones relativas a los medios de coerción a utilizar por los funcionarios; cuestiones relativas a la comunicación con el mundo exterior, etc. En cualquier caso, volvemos a repetir que se trata únicamente de recomendaciones y, por tanto, si los Estados no siguen estas Reglas Mínimas no puede adoptarse ninguna medida jurídica contra ellos.

Además de las *Reglas Mínimas*, en el ámbito de Naciones Unidas existen innumerables resoluciones tanto de la Asamblea General, como del Consejo Económico y Social (ECOSOC) respecto de esta materia, entre las que cabe destacar:

✓ *Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión* (Resolución 43/173, adoptada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1988).

✓ *Principios Básicos para el tratamiento de los reclusos* (Resolución 45/111, adoptada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1990).

✓ *Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad* (Resolución 45/113, adoptada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1990).

✓ *Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes* (Resolución 37/194, adoptada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1982).

✓ Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte (Resolución 1984/50, adoptada por el ECOSOC el 25 de mayo de 1984)

Las **Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos** y el resto de textos adoptados por la Asamblea General y el ECOSOC de Naciones Unidas forman parte de lo que se denomina soft law y, por tanto, no establecen obligaciones jurídicas para los Estado sino que únicamente son recomendaciones.

1.2. LA PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y DE LOS TRATOS Y PENAS CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES

A pesar de que, como ya adelantábamos, no existe ningún instrumento jurídico internacional de carácter vinculante que se ocupe de la protección de los derechos de los reclusos de forma integral y específica, no podemos dejar de subrayar que algunos instrumentos internacionales se ocupan de la protección de los reclusos contra la tortura. Esto es así, tanto en el ámbito universal, como en el ámbito regional.

Así, son dos las vías utilizadas: por una parte, la prohibición de la tortura y los tratos y penas inhumanos, crueles y degradantes se recoge en los textos internacionales de derechos civiles y políticos (artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos)¹; por otra parte, como ya hemos adelantado, se han adoptado tratados internacionales específicos para erradicar la tortura tanto en el seno de las Naciones Unidas como en el seno del Consejo de Europa.

1.2.1. La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura

La *Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Cruels, Inhumanos y Degradantes* de Naciones Unidas fue adoptada el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987, ratificando España el 9 de noviembre de 1987. A día de hoy son parte 144 Estados, de los que, como desgraciadamente es evidente, son muchos los que no respetan sus preceptos. Si bien la prohibición de la tortura no aparece *ex novo*, es en este momento en el que se aborda un tratamiento integral de la cuestión y cuando se crean órganos y mecanismos específicos para su castigo y protección.

La primera cuestión destacable es la inclusión de un *concepto* de Tortura a efectos de la propia Convención:

¹ Para el examen de los mecanismos que los reclusos podrían utilizar, en uno y otro ámbito, si consideran que han sido víctimas de tortura, nos remitimos a la lección primera de este programa.

“Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas” (art. 1.1)

Por otra parte, merece ser destacado que la Convención crea un órgano específico para que se ocupe de la vigilancia del grado de cumplimiento del texto por lo Estados Parte, tal y como veremos en el epígrafe siguiente.

1.2.2. El Convenio Europeo contra la Tortura

Este Convenio se inspiró en el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, antes mencionado. Así, fue adoptado el 26 de noviembre de 1987, y entró en vigor (se pudo empezar a aplicar) el 1 de febrero de 1989. Este Convenio ha sido ratificado por 47 Estados, entre ellos España.

Efectivamente, para nuestro país, el Convenio entró en vigor el 1 de septiembre de 1989, pudiendo aplicarse a partir de ese instante. Hasta el momento, se han adoptado dos Protocolos adicionales a dicho Convenio, que introducen modificaciones de tipo procesal al sistema de protección. España ha dicho sí a estos Protocolos, y por lo tanto, son aplicables a nuestro país.

El concepto de tortura cubriría en general cualquier acto que:

- causase un dolor o sufrimiento grave.
- se infligiera de modo intencionado sobre una persona.
- se realizara por los motivos antes apuntados
- y se realizara instigado por, o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público u otra persona actuando en el ejercicio de funciones públicas.

El término tortura incluye, por tanto, una variedad de métodos, desde palizas hasta abusos sexuales, confinamiento prolongado solitario, mutilación, sofocación, etc.. Aunque no hay una lista exhaustiva de actos constitutivos de tortura, el Convenio Europeo apunta también a la consideración de actos constitutivos de "un trato cruel, inhumano o degradante", como, por ejemplo, el estar sometido a una luz intensa o con los ojos vendados; o a un ruido fuerte y

continuo; estar privado de sueño, comida o bebida, etc... Finalmente, no conviene olvidar que la tortura no se limita a acciones que causan daño o heridas físicas, sino que incluye acciones que causan sufrimiento mental, tales como amenazas contra la familia o los seres queridos.

El que comete la tortura ha de ser, pues:

-un funcionario público, bien sea miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o bien sea funcionario de la administración penitenciaria,
-o en todo caso, una persona que actúa en cumplimiento de funciones públicas.

También es discutible si el Estado sería responsable por torturas llevadas a cabo por personas privadas (actores no estatales) en forma de ataques racistas o violencia doméstica, lo cual sería claro, por ejemplo, si el Estado no hace lo suficiente para prevenir tales abusos o no castiga dichos abusos de modo suficiente.

En todo caso, se requiere que cada Estado tome medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole que sean eficaces para prevenir actos de tortura en su territorio. Los actos de tortura tienen que ser considerados delitos de acuerdo con las leyes penales, y tampoco está justificado el uso de la tortura en situaciones de excepción, por ejemplo durante la guerra, inestabilidad política interna, u otra emergencia pública. Y, además, todos los Estados tienen la responsabilidad de enjuiciar a los responsables de tortura. En España recogemos la tortura como delito en nuestro Código Penal.

Lo novedoso de este Convenio es el sistema de protección que instaura, con un Comité que realiza visitas con carácter preventivo a centros de detención y establecimientos penitenciarios, y esto será objeto de estudio en el siguiente epígrafe.

De hecho, es bastante significativo que este Convenio europeo sea de “prevención” de la tortura y no “contra” la tortura, como el Convenio de las Naciones Unidas. Sin embargo, ha habido una evolución en este sentido, y se ha puesto de manifiesto la importancia de la prevención y de las visitas preventivas también en este último ámbito (el universal), tal y como veremos a continuación. Pero no debemos olvidar que, en este sentido, el Convenio europeo fue pionero.

1. ¿Son vinculantes las normas recogidas por estos tratados para España?

2. A la luz de estos textos, ¿Cualquier maltrato puede ser considerado tortura, o se requiere la concurrencia de algunos elementos especiales?

2. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS

2.1. ÁMBITO DE LAS NACIONES UNIDAS: EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA

Para ejercer las competencias de control la *Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o Penas Cruelles y Degradantes*, crea el *Comité contra la tortura*, que estará compuesto por 10 expertos, elegidos intentando respetar una distribución geográfica equilibrada, que ejercen sus funciones a título personal y no en representación del Estado del que son nacionales

La Convención establece cuatro mecanismos de control, entre los que podemos distinguir dos de ellos obligatorios (presentación de informes e investigación de oficio) y dos de ellos opcionales (comunicaciones estatales y comunicaciones individuales):

1. INFORMES: conforme al art. 19 todo Estado que haya ratificado este tratado está obligado a presentar informes relativos a las medidas que hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos que han contraído en virtud de la presente Convención. Teniendo en cuenta los plazos en que estos informes deben presentarse podemos distinguir tres tipos: a) a la entrada en vigor del Convenio, b) posteriormente, cada cuatro años, y c) los informes que solicite el Comité.

2. INVESTIGACIÓN DE OFICIO: El art. 20 introduce la posibilidad del Comité de iniciar investigaciones de oficio cuando considere que tiene pruebas de la práctica de torturas sistemáticas en el territorio de un Estado Parte. Entre las medidas a adoptar, el Comité puede designar que uno o varios de sus miembros realicen una visita al territorio del Estado. A pesar de la importancia que en principio podría revestir este mecanismo de control, lo cierto es que dada su confidencialidad, únicamente podrá incluirse un resumen de las actividades desarrolladas en este marco por el Comité en el informe anual que debe presentar a los Estados Parte y a la Asamblea General siempre que el o los Estados interesados den su conformidad.

3. COMUNICACIONES ESTATALES: a través de este sistema, un Estado parte puede denunciar a otro por considerar que ha violado alguna de las obligaciones impuestas por la Convención. Al igual que en el caso del PIDCP, el **Comité contra la tortura** no tiene competencia automática en esta materia. Para poder ejercer esta competencia, será necesario, conforme al artículo 21, que ambos Estados hayan formulado una *declaración facultativa* admitiendo esta competencia.

4. COMUNICACIONES INDIVIDUALES: Mecanismo previsto en el artículo 22 de la Convención que permite que cualquier individuo pueda denunciar ante el **Comité contra la tortura** una presunta violación de alguna de las disposiciones de la Convención. Al igual que en el supuesto anterior, la competencia del Comité en esta materia no es automática, sino que para que entre en juego, el Estado en cuestión tiene que haber realizado una **declaración**. Si se produce esta condición, cualquier ciudadano, independientemente de su nacionalidad, que se encuentre bajo la jurisdicción de uno de los Estados parte puede utilizar éste. En la Convención se establecen una serie de condiciones de admisibilidad de la comunicación (art. 22.párrafos 1, 2 y 5):

- que no sea anónima; en este sentido, debe ser presentada por la propia víctima o por quien la represente;
- no ser incompatible con las disposiciones de la Convención;
- no constituir un abuso de derecho,
- no haber sido, ni estar siendo, sometida a otro sistema internacional de control en materia de derechos humanos;
- agotamiento de los recursos internos.

Por último, en relación con la Convención, el 18 de diciembre 2002 se adoptó un *PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA* que supone un gran avance en el ámbito universal y es que este instrumento prevé visitas preventivas a centros penitenciarios, a imagen de lo que ocurre en el ámbito europeo, como veremos a continuación. El protocolo entró en vigor en junio de 2006 y ha sido firmado por 60 Estados (entre ellos España y, no, como es obvio, Estados Unidos) y ratificado por 34.

Por otra parte, en el seno de las Naciones Unidas existen otros mecanismos de promoción y vigilancia de los derechos humanos que se han centrado en la prohibición de la tortura. Es el caso de la **Relatoría Especial sobre la Tortura** creada en 1984; los **OBJETIVOS** de éste mandato son:

- Instar a los gobiernos a prevenir o sancionar los actos de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes;
- Implantar un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención,
- Declarar ilegal la incomunicación;
- Coordinarse e intercambiar opiniones con otros mecanismos y órganos de DDHH – a fin de incrementar la eficacia y evitar duplicaciones innecesarias-.
- Dar seguimiento a las recomendaciones dirigidas a los Estados;
- Prevención y reparación de la tortura infligida a mujeres, entre ellas la violación y otras formas de violencia sexual;
- Prevención y reparación de la tortura infligida a los niños.

Para dar cumplimiento a estos objetivos se han otorgado al Relator Especial una serie de competencias entre las que nos gustaría resaltar: a) la posibilidad de recibir y tramitar confidencialmente comunicaciones individuales o acciones urgentes; b) realizar visitas *in loco* y asesoramiento a países.

2.2. ÁMBITO DEL CONSEJO DE EUROPA

En cuanto a los órganos que controlan la aplicación por los Estados de los derechos humanos reconocidos en los textos antes mencionados, hay que destacar que:

El **Convenio Europeo contra la Tortura** cuenta con un Comité, formado por expertos, que adopta recomendaciones que dirige a los países: **el Comité Europeo contra la tortura**.

El **Convenio Europeo de Derechos Humanos**, cuenta con un verdadero tribunal (recordemos que en el caso de Naciones Unidas, funcionan Comisiones y Comités, pero no tribunales): *el Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, al que (desde el 1 de noviembre de 1998, en que entró en vigor el Protocolo XI) pueden acudir los individuos de Estados Miembros del Consejo de Europa que consideren se le han vulnerado los derechos reconocidos en el Convenio.

2.2.1. Comité Europeo contra la tortura

El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes creó un Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) para supervisar la aplicación del mismo, es decir, para supervisar cómo los Estados aplican las disposiciones de dicho Convenio.

Es un mecanismo:

- no judicial (el Comité no es un Tribunal)
- y de carácter preventivo (su fin es proteger a las personas privadas de libertad).

Para el cumplimiento de estas funciones, el Comité está compuesto por:

- expertos independientes e imparciales
- de distintos ámbitos: juristas, médicos, especialistas en cuestiones penitenciarias o policiales
- que cumplen sus funciones por un período de cuatro años
- que pueden ser reelegidos dos veces
- en el Comité hay un experto por cada Estado que ha ratificado el Convenio.

Su objetivo principal es el siguiente:

"El Comité debe, por medio de visitas, examinar el trato a las personas privadas de la libertad con el propósito de reforzar, si es necesario, la protección de estas personas contra la tortura y tratos o penas inhumanos y degradantes".

De este modo, el CPT visita lugares de detención: prisiones, centros de detención de menores o extranjeros, comisarías de policía, hospitales psiquiátricos, etc...

Por ejemplo, en una de las visitas del Comité a España (en septiembre-octubre de 2007), éste inspeccionó Comisarías de Policía de Madrid (Puente de Vallecas, Tetuán...), de Cataluña, el País Vasco y las Islas Canarias, Cuarteles de la Guardia Civil de Madrid y el País

Vasco, establecimientos penitenciarios en Madrid y en el País Vasco también, y el Centro de Extranjeros Menores no acompañados de Tenerife, entre otros.

Posteriormente a la **visita**, realiza una **evaluación** del trato dado a las personas privadas de libertad. Y, finalmente, como consecuencia de la visita y de la evaluación, realiza una serie de **recomendaciones** a los Estados para que mejoren las condiciones de detención o reclusión, en su caso.

En el caso de España, las recomendaciones giran en torno, fundamentalmente, a:

- la necesidad de que los detenidos sean examinados por un médico de su elección y no sólo por un médico forense,
-las condiciones de reclusión de los terroristas (derecho de acercamiento a su lugar de origen)
-y a las condiciones de internamiento de los extranjeros en los Centros de Internamiento y Centros de Estancia Temporal.

Las visitas del CPT se llevan a cabo por delegaciones de dos o más miembros del Comité, acompañados por miembros de la Secretaría de éste y, de ser necesario, por expertos e intérpretes. Con todo, el miembro del Comité nacional del Estado que se va a visitar no puede formar parte de esta delegación. Así, por ejemplo, el experto español no podrá formar parte de la delegación del Comité que visita España.

EL CPT realiza visitas periódicas a los Estados Parte en el Convenio, pero también puede organizar visitas adicionales en caso de necesidad. En todo caso, el Comité tiene que avisar con antelación al país y al centro, pero puede realizar la inspección inmediatamente después del aviso puesto que no tiene obligación de especificar el plazo en que efectuará la visita.

Los dos principios sobre los que se basa la actuación del Comité son:
-la cooperación
-la confidencialidad.

De acuerdo con el primer principio, el Estado tiene la obligación de cooperar con el Comité. Sólo puede oponerse o realizar objeciones respecto al tiempo o lugar de la visita por motivos excepcionales: seguridad pública, defensa nacional, desórdenes graves, el estado de salud de la persona o que esté en curso un interrogatorio urgente por un delito grave. Pero, incluso en estos casos, el Estado se habrá de ocupar de adoptar las medidas necesarias para que el Comité le visite lo más pronto posible.

COOPERACIÓN.-En las visitas a España, el Comité siempre ha destacado la actitud de cooperación intachable de las autoridades españolas a la hora de permitir tanto la visita como el desplazamiento libre y la inspección de los establecimientos en cuestión.

Efectivamente, y dentro de cada centro, el Comité ha de tener garantizado libre acceso, libertad para moverse dentro del centro, y la capacidad de entrevistarse en privado con los detenidos, así como con otras personas que puedan proporcionar información relevante, tales como ONGs que se ocupan de los derechos humanos.

De acuerdo con el segundo de los principios, la confidencialidad, el CPT se reúne a puerta cerrada, tras las visitas, y redacta un informe confidencial sobre los países que ha visitado. En el informe, el CPT hace recomendaciones, también confidenciales, al Estado en cuestión para asegurar la prevención de la tortura y los malos tratos. Los gobiernos tienen que responder a estas recomendaciones.

CONFIDENCIALIDAD.-En raras ocasiones, el CPT puede hacer una declaración pública si un Estado no incorpora las recomendaciones del CPT. Esto ha ocurrido en escasas ocasiones, así, dos veces en el caso de Turquía y dos veces en el caso de la Federación Rusa respecto a la situación en Chechenia. Sin embargo, el Comité ha amenazado a varios Estados sobre la posibilidad de hacer pública su Declaración, como en el caso de España.

2.2.2. La acción del TEDH en el desarrollo de los derechos de los reclusos

En primer lugar, conviene señalar que los detenidos y reclusos son titulares de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por lo tanto, están legitimados para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, invocando la vulneración de los mismos, sobre todo a partir de la entrada en vigor del Protocolo XI al Convenio, que permite al individuo acudir directamente al Tribunal.

En este caso, se trata de un mecanismo:

- de carácter judicial
- que finaliza con una sentencia, directamente ejecutoria en el seno de los Estados, que están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para cumplirla.

1. Pero, ¿cuál ha sido la jurisprudencia del TEDH en relación con los derechos de los reclusos?

En primer lugar, como ya hemos mencionado, el Tribunal asegura que se han de garantizar todos los derechos del CEDH a los presos pero, en la práctica, las disposiciones más invocadas ante dicho Tribunal en relación con los reclusos han sido:

- el art.3: prohibición de torturas y de tratos o penas inhumanos y degradantes.
- el art.8: derecho al respeto a la vida privada, vida familiar, domicilio y correspondencia.

En relación con el art. 3, el TEDH ha asegurado que, para que un acto constituya tortura y trato o pena inhumano y degradante ha de ser grave, y habremos de evaluar la duración del trato infligido, los efectos físicos o mentales sobre la víctima, e incluso, el sexo, la edad y el estado de salud de la misma, entre otros factores.

Vamos a poner una serie de ejemplos relacionados con el art. 3, extraídos de la jurisprudencia del TEDH y de la Comisión Europea de Derechos Humanos, ya desaparecida:

- Los registros corporales íntimos no necesariamente son contrarios al art.3, según el Tribunal, siempre que se realicen de modo que se reduzca el grado de humillación del detenido, evitándose el contacto físico y la presencia de otros detenidos en el momento del registro.

- En un caso concreto, se consideró que la exigencia impuesta a un recluso de que facilitara una muestra de orina en el marco de una campaña contra la toxicomanía en prisión no era suficientemente grave como para ser calificado de trato inhumano y degradante.

- Por el contrario, el aislamiento sensorial y social sí sería contrario al art.3, y no puede estar justificado por motivos de seguridad.

- En cuanto al uso de la fuerza, la violencia gratuita, el acoso al detenido, el empleo de medios coercitivos no estrictamente necesarios sí constituirían una violación al art.3.

- Por último, en casos de mal estado de salud de los reclusos, no sería violación del art.3 el hecho de no excarcelarlos, siempre que se les de los cuidados sanitarios suficientes.

En cuanto al art.8, el derecho a la vida privada, familiar y al secreto de la correspondencia, habría que incluir en el mismo el derecho a mantener relaciones con terceros, especialmente en el terreno afectivo, con el fin de desarrollar su personalidad.

A similitud de lo que hemos hecho con el art.3, vamos a poner una serie de ejemplos extraídos de la jurisprudencia del TEDH y de la Comisión:

- La imposición de un sistema de filtro de la correspondencia remitida por los reclusos a sus abogados sería una vulneración del art.8, si esta correspondencia tiene como fin que el abogado asista al preso respecto de la interposición de un recurso ante los tribunales.

- La prohibición de la correspondencia con personas del círculo familiar e íntimo del detenido también violaría la mencionada disposición.

- Sin embargo, el control normal de la correspondencia del detenido no resultaría, por sí mismo, contrario al art.8, siempre que estuviera establecido por ley, persiguiera un objetivo legítimo y fuera necesario en el contexto de una sociedad democrática (criterios que habría de valorar el TEDH).

- Los mismos requisitos habría que valorar en el caso de limitar las visitas a un preso o las comunicaciones telefónicas. Así, un rechazo de un permiso de salida solicitado por un preso para visitar a su madre hospitalizada podría entrar en conflicto con el Convenio Europeo.

Siguiendo con el derecho a la vida privada y familiar, conviene reflexionar sobre si el Convenio Europeo atribuye a los reclusos el derecho a cumplir su pena en un establecimiento cercano al de su domicilio o el de sus familiares, cuestión que afecta a España en relación con los terroristas vascos. Cabe señalar que, hasta el momento, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no ha hecho una interpretación en este sentido. Sin embargo, y partiendo del hecho de que esta causa no está en el origen de ninguna violación de los derechos contemplados en la Convención Europea de los Derechos Humanos (arts. 5, 6, 7), podríamos afirmar que la falta de acercamiento de un preso al domicilio de su familia constituiría, en todo lo caso, una falta de respeto a su vida familiar y no una injerencia o violación de ésta.

4. GLOSARIO

Costumbre internacional o norma consuetudinaria: práctica reiterada, constante y uniforme que realizan los Estados, con el convencimiento de que dicha actuación es obligatoria jurídicamente.

Derecho imperativo: son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la Comunidad Internacional como normas obligatorias, que no admiten acuerdo en contrario, es decir, que no se puede celebrar ningún tipo de acuerdo que las contradiga.

Derecho Internacional Convencional o Derecho Convencional: hace referencia a los tratados internacionales. Las fuentes de Derecho Internacional son esencialmente, aunque no de forma exclusiva, la costumbre internacional y los tratados internacionales. Hablamos del Derecho consuetudinario, para referirnos a las primeras, y de Derecho convencional, para referirnos a las segundas.

Estados Parte: Se trata de aquellos Estados que han ratificado un tratado y, por tanto, que han asumido las obligaciones jurídicas que derivan de ellos.

Hard Law: Esta expresión inglesa hace referencia a los instrumentos internacionales de los que se deriva obligatoriedad jurídica.

Normas self-executing: son aquellas normas internacionales que pueden producir sus efectos de forma automática, sin necesidad de ninguna acción por parte de órganos nacionales o internacionales. En el ámbito de los derechos humanos, diríamos que son normas *self executing* aquellas que generan derechos de forma automática por los particulares sin necesidad de un desarrollo por parte de los órganos nacionales.

Oponibilidad: En Derecho Internacional decimos que una norma le **es oponible** a un sujeto de Derecho Internacional cuando está obligado a su cumplimiento.

Organizaciones Internacionales: son asociaciones voluntarias de Estados establecidas por un tratado internacional, y que poseen una estructura orgánica permanente e independiente que expresa la voluntad jurídica de la Organización y no la de sus Estados Miembros. Podemos distinguir entre Organizaciones Internacionales de ámbito universal, como la Organización de las Naciones Unidas, o de ámbito regional, como la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea.

Protocolo: Instrumento internacional de carácter complementario que perfecciona un tratado en sus aspectos prácticos o de aplicación y cumplimiento.

Ratificación: Forma de manifestar el consentimiento a un tratado por parte de los Estados. Es a partir del momento en que se ratifica cuando se puede comenzar a hablar de obligaciones jurídicas para ese Estado.

Soft Law: Esta expresión inglesa hace referencia a aquellos instrumentos internacionales que no generan ninguna obligación jurídica, sino que son meras directrices, compromisos políticos o morales o líneas de actuación.

Tratado Internacional (Convenio, Convención, Pacto, Carta, Acuerdo, etc...): Acuerdo celebrado entre dos o más sujetos de Derecho Internacional (Estados u Organizaciones Internacionales) que se rige por el Derecho Internacional.

5. BIBLIOGRAFÍA

A fin de obtener una visión más completa, puede consultarse la siguiente bibliografía. Asimismo, recogemos diferentes fuentes de información existentes en Internet, que pueden ser interesantes al objeto de abordar mejor la materia.

BUENO ARÚS: "Las Reglas Penitenciarias Europeas", en *Revista de Estudios Penitenciarios*, nº 238, 1987.

LEZERTÚA, M: "Los derechos de los reclusos en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos", en *Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, nº 12 extraordinario, diciembre 1998.

RIVERA BEIRAS, I.: "Los Derechos fundamentales en la privación de la libertad. (Análisis socio-jurídico de la normativa internacional)", en *Cárcel y Derechos Humanos. Un enfoque relativo a la Defensa de los derechos fundamentales de los reclusos*, Barcelona, 1992.

RUILOBA ALVARIÑO, J.: *El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes de 26 de noviembre de 1987. Su aplicación en España*, Universidad Rey Juan Carlos, Dyckinson, Madrid, 2005.

Además de las obras anteriores en español, a continuación os relacionamos algunas obras en inglés y francés, en caso de que queráis profundizar en el tema:

BEDDARD, R.: *Human Rights and Europe*, Cambridge University Press, 1993.

CONSEIL DE L'EUROPE: *Règles pénitentiaires européennes*, Ed. Conseil de l'Europe, 2006.

GOMIEN, D.: *Vade-mecum de la Convention Européenne des Droits de l'homme*, Ed. Conseil de l'Europe, 2005.

3. Recursos en internet

3.1. Organizaciones, organismos e iniciativas internacionales:

Comité de Naciones Unidas contra la Tortura: http://www.unhcr.ch/spanish/html/menu2/6/cat_sp.htm

Comité Europeo de Prevención contra la Tortura <http://www.cpt.coe.int>

Consejo de Europa: http://www.coe.int/t/es/com/about_coe/

ONU: <http://www.un.org>.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: <http://www.echr.coe.int/echr/>

Textos internacionales:

Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Cruelles, inhumanos o degradantes:

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_cat39_sp.htm

Convenio europeo de Derechos Humanos: [http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-](http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/SpanishEspagnol.pdf)

[C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/SpanishEspagnol.pdf](http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/SpanishEspagnol.pdf)

Convenio europeo para la prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y

Degradantes <http://www.judicatura.com/Legislacion/1519.pdf>

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: <http://www.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm>

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

<http://www.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm>.

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles,

Inhumanos o Degradantes: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1966.pdf>